PROCEDIMIENTO: Procedimiento Abreviado 24/2022

SENTENCIA N° 196/2022

En Valencia, a seis de junio de dos mil veintidós.

Vistos por mí, D. JOSE FENELLÓS PUIGCERVER, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º Seis de Valencia, los autos del Procedimiento Abreviado seguido con número 24 del año dos mil veintidós, seguidos a instancia de [REDACTED], en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE [REDACTED], contra la Diputación Provincial de Valencia, defendida por la Letrada de sus servicios jurídicos, en impugnación del Decreto de la Diputación Provincial de Valencia de fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, relativo al pago de las liquidaciones del servicio de mantenimiento de la aplicación informática que facilita la gestión de redes y servicio municipal, procede dictar sentencia en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en fecha treinta de diciembre de dos mil veintiuno, por [REDACTED], en representación del Ayuntamiento de [REDACTED], se interpuso demanda de recurso contencioso-administrativo, en el cual, conforme los hechos y fundamentos que alegaba, terminó suplicando que se dictara sentencia estimatoria del recurso, en la que se anulara el Decreto N.º 3969 de la Diputación Provincial de Valencia, de fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, relativo al pago de las liquidaciones del servicio de mantenimiento de la aplicación informática que facilita la gestión de redes y servicio municipal, dejando sin efecto la cantidad reclamada, con expresa imposición de costas a la Administración demandada.

SEGUNDO.- Admitido a trámite el recurso por Decreto de fecha once de febrero de dos mil veintidós, tras subsanarse diversos defectos procesales, se dio traslado del mismo a la Administración demandadas con requerimiento para que aportaran el expediente administrativo, y se señaló día y hora para la celebración del juicio, que tuvo lugar en fecha dos de mayo de dos mil veintidós con la comparecencia de la recurrente y de la demandada, ratificándose la parte actora en sus pretensiones y

oponiéndose la Letrada de la Diputación Provincial por los motivos que expuso, y, tras la práctica de la prueba que, propuesta, fue declarada pertinente, consistente en documental, quedó el procedimiento visto para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En la presente litis, en que no se impugna la legitimación de las partes ni el cumplimiento por la parte recurrente de las obligaciones y requisitos procesales para entablar acción contra otra Administración al amparo del artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y centrando ya el objeto del proceso, frente al Decreto de la Diputación que requirió de pago de diversas liquidaciones al Ayuntamiento demandada en cumplimiento de un convenio para la prestación por la administración provincial del mantenimiento de la aplicación informática que facilitaba la gestión de redes y servicios municipales, por importe conjunto de 9.078,83 euros, aprobado en fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, y notificadas al Ayuntamiento de [REDACTED] en fecha 17 de junio de dos mil veintiuno, se opone la parte demandante alegando la prescripción de parte de dichas liquidaciones, y en concreto las referidas al cuatro trimestre del año 2015, de los cuatro trimestres del año 2016, y del primer trimestre del año 2017, por no haber sido exigidas en el plazo de cuatro años previsto en el artículo 66 de la Ley General Tributaria, estando pues prescritas las mismas, siendo que la Administración demandada niega dicha prescripción al interrumpirse la misma por la notificación de una factura de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, notificada en fecha 26 de julio de dos mil diecinueve, en reclamación de dichas cantidades.

Así pues, el hecho controvertido es la eficacia interruptiva de dicha factura, que no se niega que tuvo entrada y fue debidamente notificada al Ayuntamiento demandante, ni que comprendía las liquidaciones cuya prescripción se invoca en esta litis, pero tampoco se niega que fue posteriormente anulada por un acto de la Administración.

Pues bien, es cierto que, como señala la parte demandada, la jurisprudencia, en doctrina que este juzgador no comparte pero que por seguridad jurídica no se va a apartar de ella, entiende que las liquidaciones que han sido anuladas, no declaradas nulas radicalmente o de pleno derecho, sí que tienen la eficacia interruptiva del plazo de prescripción del derecho a liquidar, recordando la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que *“la jurisprudencia desde la sentencia de 19 de abril de 2006, recurso 58/2004, ha venido manteniendo de manera uniforme que la anulación de una liquidación tributaria por causa de anulabilidad no deja sin efecto la interrupción de la prescripción producida con anterioridad por consecuencia de las actuaciones realizadas ante los Tribunales Económico-Administrativos, manteniéndose dicha interrupción*

con plenas consecuencias relevantes. Esta tesis se reafirma en la sentencia de 20 de enero de dos mil once, recurso 120/2015 y en la de nueve de abril de dos mil quince, recurso 1886/013, sosteniendo que: "La anulación de una liquidación tributaria no lleva consigo la desaparición del efecto interruptivo de la prescripción ya que si constituye tal acto administrativo una acción con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regulación, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del impuesto devengado, produciría la interrupción de la prescripción según el artículo 66 de la Ley General Tributaria con independencia de que dicha acción administrativa sea sustituida por otra en el devenir del procedimiento de gestión del tributo." A su juicio, lo importante de la actuación administrativa, más que su exacta validez, es su toma de conocimiento por parte del sujeto pasivo con el objeto de evitar la indefensión, razón suficiente para estimar que la causa de anulabilidad sí que interrumpe la prescripción en curso. En el presente asunto la causa de nulidad apreciada no es de carácter absoluto o radical sino relativa, o de anulabilidad. Al respecto, debemos recordar que los supuestos de nulidad absoluta son la excepción y han de interpretarse de manera restrictiva (sentencia del Tribunal Supremo de ocho de marzo de dos mil doce, recurso 6169/2008)."

Sin embargo, también es cierto que la nulidad o anulabilidad de un acto no depende del nomen que le otorgue la Administración autora de dicha revisión, sino de la concurrencia o no de los elementos que en la Ley de Procedimiento Administrativo Común y en las restantes leyes se enuncian para determinar su nulidad o anulabilidad. Y, en el presente caso que nos ocupa, en que por la Administración, documentos cinco y seis del expediente, se declaró la anulabilidad de la factura notificada que sirve como requerimiento de pago, el fundamento para decretar la misma no fue otra que la ausencia de aprobación de las liquidaciones que tenían su reflejo y que era exigido su pago por la mentada factura. Esto es, no existía en aquel momento derecho a liquidar válidamente ejercitado por la Administración demandada, y por tanto su exigencia de pago era un acto de contenido imposible, que, artículo 47.1 c) de la Ley 39/2015, es nulo de pleno derecho.

Por tanto, siendo que la factura conteniendo el requerimiento de pago era un acto de contenido imposible, y siendo que el derecho a realizar la oportuna liquidación se realizó por vez primera (no existe previa anulación de liquidación alguna) y notificó por la Administración transcurrido cuatro años desde su exigibilidad con respecto a los ejercicios objeto de impugnación, procede estimar el recurso, sin perjuicio del derecho de la parte demandada a practicar nueva liquidación por los ejercicios no prescritos.

SEGUNDO. Conforme al artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, *"en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que*

aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho... La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima."

En el caso que nos ocupa, siendo que la estimación a la demanda ha sido íntegra, procede seguir el criterio general, si bien limitando a trescientos euros, conforme las normas orientativas para procedimientos abreviados en el orden contencioso-administrativo, su cuantía.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación.

FALLO

Que ESTIMO ÍNTEGRAMENTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por ██████████ en nombre y representación del Ayuntamiento de ██████████, siendo demandada la Diputación Provincial de Valencia, defendida por la Letrada de sus servicios jurídicos, DECLARO NO AJUSTADO A DERECHO el Decreto N.º 3969 de la Diputación Provincial de Valencia, de fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, relativo al pago de las liquidaciones del servicio de mantenimiento de la aplicación informática que facilita la gestión de redes y servicio municipal, dejando sin efecto la cantidad reclamada, y CONDENO a la parte demandada al abono de las costas procesales causadas, con un límite máximo conjunto de trescientos euros.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Se hace constar que la anterior Sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Magistrado-Juez que la suscribe, en el día de la fecha, estando celebrando audiencia pública, de lo cual doy fe.